



Realidad Económica

Nº 311 • AÑO 46

1 de octubre a 15 de noviembre de 2017

ISSN 0325-1926

Páginas 9 a 39

PROCESOS POLÍTICOS

Disputa por la hegemonía: el kirchnerismo en la Argentina

Francisco J. Cantamutto*

Investigador IDAES-CONICET e integrante de la Sociedad de Economía Crítica (SEC)

RECEPCIÓN DEL ARTÍCULO: x de 2017.

ACEPTACIÓN: x 2017.

Resumen

El artículo aborda el proceso político argentino que resulta en la emergencia del kirchnerismo y propone una periodización histórica. Una fracción de la clase dominante logró construir hegemonía a partir de una ruptura de tipo populista. Concretamente, la gran burguesía industrial logró incorporar en su discurso y propuesta de orden político no solo las demandas de otras fracciones de la clase dominante, sino también de las clases populares, lo que le permitió construir un consenso activo. Tres son los hallazgos relevantes: primero, el orden político kirchnerista fue de tipo hegemónico, lo cual significa que organizó de una manera particular la dominación, logrando convocar consenso activo, deliberado, de parte de las clases populares; segundo, derivado del anterior, la constitución de nuevas identidades políticas es el resultado de este orden político específico; tercero, el agente de la construcción hegemónica fue una fracción del Bloque en el Poder, concretamente, la industria concentrada.

Palabras clave: Bloque en el Poder – Hegemonía – Populismo - Kirchnerismo

Abstract

Dispute over hegemony: Kirchnerism in Argentina

The article addresses the Argentine political process which results in the emergence of Kirchnerism, and it proposes a historical periodization. The defended argument is that a fraction of the dominant class managed to build hegemony based on a populist-type rupture. More concretely, the big industrial bourgeoisie managed to incorporate into its discourse and political proposal not only the requests of other fractions of the dominant class but also those of the popular classes which allowed to build an active consensus. There are three relevant findings: firstly, the Kirchnerist political order was of a hegemonic type, which means domination was organized in a particular way, managing to call active, deliberate consensus of behalf of the popular classes; the second finding is a byproduct of the first: the constitution of new political identities is the result of this specific political order; thirdly, the agent of hegemonic construction was a fraction of the Power Block, more concretely, of concentrated industry.

Keywords: Power Block - Hegemony - Populism - Kirchnerism

El inicio del siglo XXI marcó un nuevo escenario en América latina. Tras la impugnación de los movimientos sociales al orden neoliberal, aparecieron gobiernos con una nueva impronta, líderes que retomaban demandas y discursos de las clases populares. Tras una década y media, seguimos debatiéndonos por el sentido y alcances de estas experiencias. El tema de este artículo es el proceso político argentino que resulta en la emergencia del kirchnerismo, proceso que se desarrolla como parte de este escenario latinoamericano, y que, por ello, puede arrojar luces sobre la interpretación de otros procesos.

El presente artículo, tiene por trasfondo una discusión más amplia sobre cómo se configuran los órdenes políticos. Si cierto marxismo estructuralista hizo recaer todo el peso en la economía, creemos que ciertas propuestas teóricas en boga tienden a corregir el error con otro exceso, esta vez “politicista”, asumiendo una contingencia indeterminada. Indagar el hiato entre economía y política, entre determinaciones e historia, entre estructura y agencia, es constitutivo de las ciencias sociales, y este texto se inscribe en esta tradición de debate. Si bien el texto se centra sobre la Argentina, creemos que la discusión puede iluminar una perspectiva de análisis aplicable a otros espacios nacionales y coyunturas. Nos apoyamos en los aportes de otros trabajos para indagar el proceso político que dio lugar al orden político kirchnerista, buscando una explicación de corte más integral¹. El énfasis está puesto aquí en la explicación integral del proceso político.

El argumento presentado es que una fracción de la clase dominante logró construir hegemonía a partir de una ruptura de tipo populista. Concretamente, la gran burguesía industrial logró incorporar en su discurso y propuesta de orden político no sólo demandas de otras fracciones de la clase dominante, sino también de las clases populares, lo que le permitió construir un consenso activo. El texto se organiza como sigue. La primera sección ofrece las principales matrices de interpreta-

¹ En una línea de debate semejante, con diversas interpretaciones, consultar López (2015), Manzanelli y Basualdo (2016), Piva (2015) y Vilas (2017). Remitimos a los trabajos referidos en cada sección para mayores precisiones.

ción sobre el fenómeno. Las siguientes cuatro secciones se ordenan según la periodización histórica del proceso, marcando en cada caso las características centrales de las fases atravesadas. Remarcamos la necesidad de recurrir a las referencias bibliográficas para ahondar en cada aspecto: el presente texto busca presentar una interpretación integral del mismo.

1. Ejes del debate

Siguiendo a Cantamutto (2013), Gamallo (2014) y López (2015), se pueden encontrar dos grandes matrices de explicación del kirchnerismo: una que parte de una perspectiva marxista -recuperando especialmente aportes de Antonio Gramsci y Nicos Poulantzas- y otra que abreva desde la perspectiva post-fundacional -en especial, los aportes de Laclau-.

El enfoque post-fundacional aporta al menos cuatro ventajas. Primero, permite tomar en cuenta el rol de organizaciones que el análisis clasista -sin negar- oscurece. Segundo, ofrece una interpretación plausible y empíricamente fructífera del fenómeno populista, como *forma* de la dinámica política. Tercero, su énfasis en el carácter *construido* del orden político, que implica dar cuenta de la disputa (el momento de “lo político”) por definir el mito trascendental que unifica a la comunidad así como la distribución de roles a su interior. Finalmente, se alienta el estudio de los discursos para recuperar las interpretaciones que los agentes hacen de la realidad en la que actúan. Hay dos limitaciones que nos parecen centrales. Su énfasis en la creación de identidades soslaya la persistencia de ciertos agentes en el campo político. Adicionalmente, el análisis del discurso, como totalidad articulada, suele limitarse al análisis de actos de habla, eludiendo la incorporación teóricamente informada de otras dimensiones de la realidad (como los procesos económicos y, en menor medida, los institucionales).

La matriz marxista puede pensarse como un complemento simétrico. En este sentido, su reconocimiento de agentes de clase, el rol del Estado a través de las políticas públicas, y su relación con la acumulación, permiten incorporar los aspectos soslayados. Sin embargo, tiene ciertas dificultades para interpretar el kirchnerismo como populismo más allá del set básico de políticas, quedando así como una apelación vaga, que dificulta explicar con claridad la operación política que permite la

construcción de hegemonía. Asimismo, tiende a enfatizar la manipulación, la cooptación y el engaño, que -aunque definitivamente existieron- tiene poca potencia para explicar el orden. Así, mientras las organizaciones populares fueron el eje de la disrupción de la Convertibilidad, su capacidad política de esfuma en los siguientes años.

La presente investigación busca abreviar en esta laguna originada en la falta de diálogo entre enfoques. Reconocemos la existencia de ciertos desajustes teóricos en tal confluencia analítica, dada por el hecho de que las perspectivas se construyen sobre supuestos contradictorios: no se trata sólo de “olvidos” sino de ontologías (qué constituye la realidad) y epistemologías (cómo accedemos a ella) diferentes, que suponen prestar atención a distintos agentes, procesos y situaciones. Pero nuestra intención no es enfrentar dos enfoques teóricos entre sí, sino ambos frente a los hechos. La mirada que buscamos construir no es una arquetípico-lineal que parta de la teoría a los hechos sin vuelta atrás: partimos del análisis de que las perspectivas teóricamente informadas realizan del kirchnerismo, para buscar de allí una interpretación comprensiva. Esta investigación se propone trabajar sobre los puntos ciegos de las diferentes perspectivas, haciéndolas dialogar, buscando evitar sesgos politicistas o economicistas (de los que mutuamente se acusan los enfoques referidos).

En tal sentido, asumimos que el kirchnerismo hunde sus raíces en las trayectorias de la disputa social, siendo imposible entenderlo como un puro efecto de una fuerza en el gobierno. La perspectiva defendida asume la posibilidad de remitir a totalidades sociales, aun cuando se acepte que éstas son imperfectas, contingentes y no cerradas.² Los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) forman parte de una metamorfosis más amplia de la sociedad argentina, que tiene por motor la disputa política más allá de las fronteras de la estatalidad. Asumimos que la sociedad es conflictiva, siempre está en relaciones tensadas. No podemos dar cuenta de la sociedad como totalidad, pero podemos estudiar en las relaciones regulares, estables que enmarcan la contingencia del cambio.

² Las discusiones teóricas y metodológicas ligadas con esta posición son múltiples y profundas. No pretendemos resolverlas aquí, sino tan solo dejar en claro nuestro punto de partida. Remitimos, por la importancia que tuvieron para esta investigación, a los aportes de Isaac (1987), Osorio (2001) y Pereyra (1988).

Entendemos entonces que el proceso indagado se inicia en 1998, cuando los agentes sociales comenzaron a revisar sus interpretaciones sobre el orden preva-
leciente (la Convertibilidad, vigente entre 1991 y 2001), elaborando nuevas de-
mandas y estrategias de acción. El orden político neoliberal se comenzó a disgregar,
y fue ello -no un problema económico- lo que configuró la crisis experimentada
(Fair 2016). La cadena de acciones y reacciones que se desató, modificó las inter-
pretaciones, demandas y alianzas de los agentes sociales, terminando por definir
un nuevo orden político, que llamamos kirchnerista. El argumento de interpreta-
ción de este proceso político es que una fracción de la clase dominante logró cons-
truir hegemonía a partir de una ruptura de tipo populista. Para ello, se mostrará
cómo el bloque en el poder (en adelante, BEP) se escindió internamente, y, sin per-
der acuerdos básicos, buscó construir a partir de sus demandas particulares un
consenso que superó sus límites corporativos. En definitiva, logró proponer sus de-
mandas como las de toda la sociedad, definiendo un orden político. Para ello, con-
sideró demandas de otras clases, al punto de cambiar su propio programa
(conjunto de demandas). Concretamente, la gran burguesía industrial logró incor-
porar demandas no sólo de otras fracciones de la clase dominante, sino también
de clases populares en su discurso y propuesta de orden político, lo que le permitió
construir un consenso activo.

Esta ampliación del discurso y programa no se resolvió sólo por vía propia, sino
que la instancia de mediación de representantes políticos tuvo una cuota no trivial
en la estructuración final del proceso: no en vano, a pesar de que sostenemos que
es una fracción de la gran burguesía la que construye hegemonía, el fenómeno en
cuestión lo conocemos como *kirchnerismo*. La mediación política a través de repre-
sentantes constituye una parte esencial del devenir Estado en la conquista de la le-
gitimidad, y en ciertos casos, el consenso. Este trabajo afirma esta mediación, pero,
a diferencia de ciertos estudios politológicos, no se cierne con exclusividad a ella.

Debemos enfatizar que no afirmamos que se trate de un proyecto prefigurado
de esta fracción de clase, ni tampoco de la fuerza política que lo representó. Muy
diferente, se trata de una estructuración de relaciones no establecida *ex ante* por
ningún agente social; es el resultado de la interacción conflictiva. Esta interacción
conflictiva es una clave central: a pesar de afirmar la existencia de relaciones esta-
bles de dominación y explotación, estas regularidades estructurales no explican

por sí mismas la existencia de las clases sociales, pues es necesaria su actuación concreta, histórica, organizada y polémica. Las clases sociales actúan a través de sus organizaciones, y a través de ellas elaboran interpretaciones, demandas, alianzas con las cuales se proponen alcanzar sus objetivos (Adamovsky 2007). En tal sentido, se hablará de clases populares como el conjunto de organizaciones representativas de aquellos sectores subordinados en las relaciones de dominación y explotación: no hay pasaje de la economía a la política, o de la estructura a la contingencia, sino existencia real en la polémica política.

Justamente, la dinámica política por la cual el empresariado industrial logró ampliar sus demandas es descrita como populismo. La apelación a referencias simbólicas edificadas alrededor del significante pueblo, construyendo un juego de tensiones con las instituciones de la democracia liberal, que divide porosamente la comunidad política afirmando tanto la legitimidad de la parte relegada (*plebs*) como la del todo (*populus*). A través del populismo, demandas de las clases populares lograron ser parte de las políticas públicas y el discurso oficial, funcionando como una profundización de la democracia. En tal sentido, efectivamente, el pueblo irrumpe en el orden político logrando que sus demandas sean consideradas.

2. La crisis del orden neoliberal

El orden neoliberal en la Argentina se expresó en el plan de la Convertibilidad, que excedió la formulación de políticas públicas y reformas estructurales impulsados por la “comunidad de negocios” del BEP integrado (Basualdo 2006), para ordenar el campo de antagonismos políticos (Barbosa 2010). El gobierno peronista de Carlos Menem (1989-1999) fue sucedido por el de Fernando de la Rúa (1999-2001), bajo una coalición partidaria -la Alianza-, quien mantuvo los fundamentos del régimen de políticas.

El primer momento del proceso político analizado lo constituye la crisis de este orden. A partir de 1998, las tensiones que lo caracterizaron se hicieron irresolubles bajo el mismo régimen de políticas (Wainer 2013). Estas políticas públicas podrían haber sorteado o atenuado antes el problema de la acumulación: por ejemplo, ajustando el tipo de cambio o suspendiendo los pagos de deuda en 1999. ¿Por qué no se cambiaron las políticas antes? El problema era lograr un acuerdo que impulsara

alguna salida, y ahí estuvo el conflicto que dio forma a la crisis. Éste es el *carácter eminentemente político de la crisis*: la dificultad de acordar una interpretación, y por ello, una salida, fue lo que profundizó lo que, en el inicio, era una simple recesión. No hay, en tal sentido, ninguna dinámica progresiva, no hay un *pasaje* desde la economía a la política. La crisis se presentó como *global* (O'Donnell 1982) porque de inicio lo que quebró fue la interpretación estable del orden político descrito: entre las clases populares, entre los partidos políticos, y al interior de la clase dominante.

¿Por qué no se aplicaron otras políticas? ¿Es acaso pura responsabilidad de un mal manejo de gobierno por miopía, ignorancia o corrupción? La emergencia de un orden específico de reformas sociales orientadas en un sentido concreto -cuya formulación resumía la Convertibilidad- había condicionado no sólo la forma de la acumulación sino las expectativas y posibilidades de los actores políticos y sociales. Para poder estructurar una salida se requería antes de una interpretación del problema, que, además, lograra convocar un acuerdo colectivo. Es decir, hacía falta que cierta interpretación ganara generalidad, pudiera presentarse como la mejor salida.

Apenas iniciada la recesión, aparecieron las primeras referencias de posibles soluciones entre las distintas fracciones de la gran burguesía (Fair 2016). La “comunidad de negocios” se comenzó a disgregar con la aparición del Grupo Productivo (GP), liderado por la Unión Industrial Argentina (UIA), y que incluía a la Cámara Argentina de la Construcción (CACons) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) (Merino 2014). Sin embargo, en un primer momento, e incluso luego de que la Alianza asumiera el gobierno, la gran burguesía privilegió el acuerdo mínimo de mantener el esquema de políticas existentes y avanzar en las líneas de acuerdo. Por eso el gobierno privilegió políticas afines con este lineamiento básico, que, en los hechos, significaba empeorar la situación del conjunto de las clases populares. Para las elecciones de 2001, la Alianza ya había enfatizado un sesgo tecnocrático acorde con el sentido común instituido en los años anteriores: administrar de modo eficiente y transparente (Bonnet 2012).

La profundización del sesgo flexibilizador y represivo diluyó de modo creciente la base de consenso negativo del orden neoliberal: la idea de que cualquier alter-

nativa era peor (Piva 2007). El significante estabilidad perdía así valor como punto nodal discursivo, quedando asociado con los significantes de “previsibilidad” y “certidumbre” que referían la banca extranjera (nucleada en ABA, la Asociación de Bancos de la Argentina) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), tomando forma así un efecto de frontera que ponía las demandas de las clases populares por fuera del orden político, facilitando la posibilidad de que éstas entraran en equivalencia. Esto no significa que existiera una interpretación ya construida: de hecho, todo el período contuvo importantes esfuerzos por organizar esas alternativas. La confluencia del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), así como la iniciativa del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) y los congresos piqueteros fueron diversas muestras de este proceso (Campione y Rajland 2006; Svampa y Pereyra 2004).

Pero, justamente, estas alternativas mostraban límites para confluir (Cantamutto 2015). Entre los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) había al menos tres grandes variantes de interpretación y estrategia: de ellas, las orientadas desde el marxismo y la izquierda independiente estaban más lejos de encontrar acuerdos con otros sectores sociales. Estas orientaciones cuestionaban al orden neoliberal y al capitalismo de conjunto, en un discurso más completamente estructurado. La variante nacional-popular, en cambio, encontraba menos reparos en actuar junto con otras organizaciones de las clases populares, concretamente, el sindicalismo (Cortés 2008; Natalucci & Schuttenberg 2013). El diálogo más fuerte se daba con la CTA, que actuaba como vínculo con el MTA -sin relaciones orgánicas con ninguna expresión de desocupados-. La mayor parte de las organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) participaban de las iniciativas de la CTA, alimentando la lectura que unía los crímenes de la dictadura con “el modelo” económico y social excluyente de los noventa.

La CTA iba más lejos y componía alianzas con partidos de centro izquierda (ARI, PSP, PSD, Polo Social), lo que le permitía ganar visibilidad y capacidad organizativa, pero la alejaba aún más de las organizaciones de orientación marxista (que más tarde serían catalogadas como los sectores “duros” del espacio piquetero). Las demandas concretas, sin embargo, no diferían tanto, planteando la necesidad de modificar la distribución del ingreso como un derecho ganado por la ciudadanía. La expansión de los DDHH más allá del respeto a la vida servía para hacer a un lado

la discusión de la Convertibilidad como eje del problema (pues la vulneración de los DDHH existió bajo otras formas). El discurso basado sobre los significantes de derechos, ciudadanía e inclusión se enfrentaba con el orden neoliberal excluyente.

El MTA, por su parte, si bien coincidía en protestas con la CTA, defendía una idea de distribución basada sobre la condición de empleo, remitiendo a la inclusión laboral formal que, además, le daría mayor capacidad de representación corporativa. Esta diferencia no fue menor en absoluto: es la base sobre la cual el MTA pudo confluir con el programa que el GP iba configurando. Este último se había distinguido lentamente del resto de BEP, incorporando a su discurso elementos que asociaban el interés de la industria al desarrollo productivo del mercado interno, lo que redundaba en mayor empleo, causando mayor bienestar a toda la nación. El proceso de generalización de sus propuestas permitió al GP elaborar el discurso de reconstitución plena de la comunidad política vulnerada por el orden vigente. Al no encontrar respuesta a sus reclamos, el GP se alejaba tanto del gobierno -responsable de las políticas públicas- como de las fracciones del BEP que defendían ese programa. Es decir, quedaba también fuera del orden político (y discursivo), lo que le permitía buscar alianzas con otros sectores excluidos. A medida que esto ocurría, el programa del GP iba tomando una forma más compleja que la simple devaluación: lo que al principio era sólo una demanda por aumentar la competitividad frente a capitales externos, terminó apareciendo como el impulso a la demanda interna, al trabajo, a la producción, y el bienestar nacional.

Tanto la iniciativa del FRENAPO (que involucran a la CTA, pero también a organizaciones del mediano capital, como la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y la Federación Agraria Argentina (FAA) como las del GP muestran que no sólo los MTD pudieron romper la barrera corporativa en sus demandas. Coincidimos con Muñoz (2010) en que la capacidad disruptiva de estos últimos para quebrar la frontera que estructuraba el discurso político de ese momento. Sin embargo, consideramos que constituye una omisión significativa centrar la mirada sólo sobre este actor, pues se oblitera la existencia de una fuerte disputa entre diferentes proyectos de articulación. Es éste el mismo error magnificado por la interpretación de un “argentínazo”, protagonizado por el “ala más dura y consecuente” de los piqueteros (Rieznik 2003).

Un problema de difícil resolución era lograr traducir este programa en la representación de un partido, lo que obligaba -necesariamente- a introducirle cambios. La tradición peronista de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el MTA facilitaban la interpelación a su imaginario de industria y redistribución. Por esto, el Partido Justicialista (PJ), incluso después de las transformaciones del menemismo, representaba la alternativa disponible. Aunque las afinidades de Eduardo Duhalde con el mismo habían sido planteadas en 1999, haber perdido la elección lo dejó sin capacidad de concertar el liderazgo necesario al interior del propio PJ. Sin embargo, todos los demás referentes nacionales ponían distancia sobre el programa dolarizador de Menem (Wainer 2013). La Alianza, mientras tanto, sufría una permanente depuración, que dejaba al Frepaso y a la línea alfonsinista de la Unión Cívica Radical (UCR) en una posición difícil: aunque se tornaban crecientemente críticos del modelo, no podían abandonar al gobierno a su suerte. Estos partidos quedaban sin capacidad de acción mientras el gobierno se aislaba más en su diálogo excluyente con la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), SRA y el FMI. Este sesgo de representación del gobierno alimentaba la distancia del GP con el resto del G8.

Las fuerzas de centro izquierda que se desprendieron de la Alianza o sus partidos componentes se acercaron al programa de la CTA. Los partidos de izquierda buscaron capitalizar el descontento con un programa más radical, que, si bien ganó cierto lugar en las elecciones, no alcanzaba a ganar representación en el Estado. Debe enfatizarse que ambos programas tomaban demandas de los sectores piqueteros, en sus diferentes variantes. Sin embargo, en un clima de creciente desconfianza de las instituciones representativas, los alcances de estas fuerzas estaban limitados. La dificultad de canalizar en la representación en el Estado los programas de salida de la crisis, motorizaban aún más el descontento en las calles. Esto se expresó con dureza para los sectores medios, que habían depositado su confianza en la Alianza como propuesta novedosa. Ello permitió que confluyeran en las calles con otros sectores sociales, en lo que terminó como una insurrección popular ante el Estado, con consignas magnificadas del tipo “piquete y cacerola, la lucha es una sola” (Iñigo Carrera & Cotarelo 2006). Las discrepancias entre fuerzas populares ponían límites a su capacidad de elaborar un programa unificado. Esto no significa que no hubiera avances en tal sentido, como lo muestra el FRENAPO o los congresos piqueteros. Sin embargo, en las elecciones de octubre de 2001, más allá del fuerte

abstencionismo y “voto bronca” (Cheresky 2002), el PJ había conseguido las posiciones clave (presidencia en ambas cámaras), quedando al comando del gobierno y el Congreso ante la renuncia del presidente.

Esquemáticamente, en este momento: a) el gobierno quedó crecientemente aislado en su relación con sólo una parte del BEP; b) el GP fue la única fracción del BEP que logró relacionarse con organizaciones de las clases populares; c) la CTA actuó como nodo de vínculo entre diferentes organizaciones (sindicales, de DDHH, del movimiento piquetero, e incluso del pequeño y mediano capital), siendo así agente clave en la construcción de la cadena equivalencial popular.

3. El programa “productivo”

Tras la insurrección popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 se produjo una rápida sucesión al interior del Estado, siguiendo la Ley de Acefalia (Rodríguez Diez, 2003). Por la relevancia específica para el proceso, nos centramos sobre los períodos de Adolfo Rodríguez Saá (diciembre de 2001) y Duhalde (enero de 2002 a mayo de 2003). En estos meses, se produjeron acelerados cambios en distintos aspectos del orden político. Aunque se sostuvieron las regulaciones estructurales, se modificaron las políticas macroeconómicas, dando forma a un nuevo impulso a la acumulación (Cantamutto y Costantino 2016; Félix y López 2012; López 2015). Con estos presidentes se modificó el discurso oficial, diferenciándose por la apelación a significantes ligados con la producción y la inclusión por la vía del empleo. Esto reflejó, y a la vez produjo, nuevos escenarios de disputa al interior del BEP y con las clases populares.

Como explicamos en la sección anterior, el BEP mostró una división interna que afloró con evidencia una vez que la crisis institucional puso sobre el tablero la necesidad de tomar una determinación sobre el rumbo a seguir. La caída del gobierno de De la Rúa fue resultado -principal pero no únicamente- de la movilización popular, que cuestionó de plano la legitimidad del conjunto del aparato estatal. Mientras se resolvía dentro del Congreso la sucesión presidencial, el GP hizo público su detallado programa. Resulta claro que el programa había sido delineado y corregido en los meses previos, lo que le permitió un pronunciamiento claro y veloz.

Los gobiernos de Rodríguez Saá y de Duhalde tomaron este programa como la guía de sus políticas públicas (Cantamutto 2015). La nueva estructuración del régimen de acumulación alteraba la distribución de poder estructural entre las fracciones del capital: del lugar preeminente de los capitales extranjeros ubicados en los servicios (financieros, en particular) durante la Convertibilidad, la nueva fase consolidó el lugar de aquellos productivo-exportadores como gran ganador (Wainer 2013). Esto se puede visualizar tanto en su rol como abastecedor de divisas, como en las políticas públicas destinadas a elevar su rentabilidad. La cesación de pagos de la deuda, la devaluación y la pesificación de la economía fueron el nuevo plan de regulación de la acumulación, medidas que sufrieron modificaciones según la disputa se iba resolviendo en cada caso (Félic et al. 2012). La distribución de ganancias y pérdidas entre fracciones del capital no se condice exactamente con sus posiciones políticas.

Las fracciones que fueron desplazadas del comando del BEP -finanzas y privatizadas- recibieron compensaciones sustanciales a través del Estado; es decir, se socializó el costo de tal desplazamiento (Félic et al. 2012). El FMI ejerció toda la presión a su alcance para lograr estas compensaciones y otras prerrogativas para los capitales, a las que el gobierno accedió (los “14 puntos”, ley de quiebras, etc.) (Rodríguez Diez 2003). A la gran burguesía agraria, en cambio, -aunque se vio claramente beneficiada por el nuevo régimen-, se le impuso el pago de una “cuota” de la renta apropiada mediante las retenciones (derechos de exportación), lo cual no impidió que sus ganancias se incrementaran. Sin embargo, implicó una obligación contraria a sus demandas. Es decir, esta fracción fue ganadora desde el punto de vista de la economía política, pero fue relegada de la dirección política (como lo muestra su exclusión de los mecanismos de diálogo social). Los capitales concentrados del agro ocuparon este lugar *desgarrado* en el BEP: ganador económico, desplazado político. La fracción industrial, en cambio, no sólo se beneficiaba por las políticas; además se garantizaba un lugar privilegiado en el diálogo con el gobierno, incluyendo la creación de un Ministerio de la Producción para su principal dirigente del momento.

Como mostramos, esta nueva correlación de fuerzas dentro del BEP causó no pocas controversias. Para poner límites a estas disputas internas, la gran burguesía mostró en la etapa una voluntad explícita por volver a agruparse de conjunto. Los

llamados al G8 fueron infructuosos por las divergencias respecto de las políticas específicas, pero crearon la Asociación Empresaria Argentina (AEA) como demostración de unidad: según sus propios documentos, la entidad tenía por objetivo principal defender el rol del capital -sin distinción de origen ni sector- en la economía argentina. Si bien sus demandas quedaron circunscriptas a la búsqueda de estabilidad, previsibilidad y un ambiente de negocios propicio (rémoras del orden neoliberal), su importancia radicó en explicitar la percepción por parte de las clases dominantes de un posible trastocamiento de las bases mismas de organización de la sociedad.

Esto se relaciona con el nivel de organización y capacidad disruptiva de las clases populares, en sus diversas expresiones. No existía una dirección ni un programa unificados, había dificultades en la construcción de un liderazgo común, y no pocas discrepancias político ideológicas. Pero estas limitaciones no impedían que las clases populares pudieran movilizarse y poner sus demandas en el espacio público, funcionando como actor con poder de veto. No sólo la caída de De la Rúa demostró esto, sino también el adelantamiento de las elecciones de 2003. Los gobiernos, en aras de contener esta presión, debieron poner en marcha una serie de iniciativas que considerasen -parcial e imperfectamente- las demandas populares.

En otros términos, se puede decir que, a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001, apareció desplegada una solidaridad difusa entre demandas y organizaciones populares, con particular importancia del significante tendencialmente vacío del “que se vayan todos”, pero sin avanzar en una articulación con visos hegemónicos. La disrupción del momento de lo político presentado con toda su fuerza no tuvo un sujeto político de posición popular que ocupara el momento de representación de la cadena de equivalentes, y ese lugar fue -o intentó ser- ocupado por líderes del mismo subsistema de la política que se buscaba repudiar (Mazzeo 2011). Pero para hacerlo, éstos debieron recuperar la discursividad popular instalada en la escena política.

La revalorización del empleo como fuente ética y de inserción social fue una expresión de este cambio (Freyre, 2014). No puede dejar de remarcarse que esta revalorización se hizo de modo subordinado al valor de *la producción*, que ponía a ciertos empresarios como agentes responsables del (nuevo) futuro de la Argentina.

Rodríguez Saá, pero más especialmente Duhalde, marcaban la diferencia con el pasado reciente de especulación neoliberal, dando esperanzas de una refundación nacional ligada con la producción industrial y a la inclusión vía empleo. La producción -que Duhalde elevó a valor moral por la vía de su alianza con la Iglesia católica- era representada en el discurso por todo el capital aplicado de modo productivo, pero se especificaba en la industria en las políticas públicas.

Es que la fuente de ese empleo estaba atada a las decisiones de acumulación de las fracciones ganadoras de la gran burguesía (GP), y por eso eran sus demandas las que había que tramitar en primer lugar. Mientras se “convencía” al capital de aplicar sus recursos a la acumulación productiva, la contención social pasó por una ampliación masiva de los planes sociales, la creación de mecanismos institucionales de diálogo social -propuestos por la Iglesia católica- y también la represión (“palos y planes”). Los planes y los mecanismos paraestatales de diálogo tuvieron un efecto al interior de las organizaciones populares: crear divergencias en la interpretación de la fase y la estrategia a seguir. Es decir, incluso con evidentes insuficiencias, se mostraba la productividad de estos mecanismos de inclusión limitada frente a la represión -que funcionaba como factor de unidad entre sectores de las clases populares-.

Esta productividad, sin embargo, tenía restricciones insuperables para gobiernos no elegidos por el voto popular en un contexto de crisis de legitimidad. Rodríguez Saá y Duhalde entendieron que el nuevo escenario dispersaba irremediamente a los diferentes grupos partidarios, sólo que el primero subestimó el poder de veto que éstos preservaban. El conjunto de los partidos políticos buscó reestructurarse, pero llegaron a las elecciones de 2003 con una disgregación significativa, que mostraba que la crisis de representación no tenía sencilla vuelta atrás. Las corrientes partidarias mayoritarias se fragmentaban en múltiples partidos, ninguno de los cuales era capaz de articular creíblemente demandas contradictorias. Es que la disputa atravesaba -como dijimos- al conjunto de las clases, y los partidos no podían escapar de esta realidad.

Resulta importante señalar que una parte de las características señaladas como constitutivas del populismo por el enfoque post-fundacional se encontraban pre-

sentes ya: la polarización entre pueblo y BEP, representado en este momento por quienes personifican el neoliberalismo y la usura, en una dicotomización del espacio político común, que permitía la irrupción conjunta de un grupo de demandas insatisfechas en el orden previo. La insuficiencia de esta definición obliga a la mayor parte de los estudios de este enfoque a omitir este período de su análisis, o a centrarse exclusivamente sobre la continuidad de la protesta. Una valiosa excepción es el caso de Muñoz (2010), que señala la efectividad que tuvo este cambio en el orden político: al poner al neoliberalismo como enemigo y al Estado como garante de la inclusión, se desbarataban los parámetros del antagonismo previo (“el enemigo había cambiado de forma”; p. 181), poniendo en crisis la incipiente constitución identitaria popular. Como señala la autora, esto favoreció la exacerbación de las diferencias discursivas y de estrategia al interior del campo popular, en el marco de una consigna común que nucleaba en la negatividad y el rechazo, pero impedía pensar un orden político nuevo.

¿Qué faltó?

Dos de las mayores restricciones fueron que estos gobiernos no fueron elegidos por el voto, lo cual cuestionaba sus credenciales en tanto representantes, y la falta de eficacia en los efectos económicos mediatos de las políticas aplicadas, que comenzaron a notarse sólo meses después (especialmente, en salarios y empleo), cuando la credibilidad del gobierno había sido ya dilapidada. Ambas características ponen en relieve la importancia de las condiciones de producción y de recepción de los discursos: para que la interpelación populista fuera efectiva, tenía que provenir de un representante legítimo (no impuesto) y permitir una lectura creíble de las condiciones de existencia del pueblo. El énfasis teórico en el carácter total y no enunciado del discurso, así como el sesgo empírico de estudiar principalmente el discurso hablado del líder (eventualmente, de las agrupaciones que lo siguen), atentan contra una comprensión acabada del proceso político que permitió la construcción de hegemonía en clave populista. Queda claro hasta aquí que la estructuración del orden político fue guiada por las demandas de una fracción del BEP, que ya había iniciado el camino de construcción de hegemonía previamente: incluyendo elementos de la discursividad popular y sus demandas, lo que modificaba el programa defendido (para que adquiriera visos de universalidad) pero sin afectar sus lineamientos básicos.

Resumiendo de modo esquemático, se pueden subrayar: a) la relación programática del gobierno con las fracciones ganadoras y dominantes del BEP; b) el establecimiento de un diálogo “social” con la CGT y el MTA; c) la división del movimiento piquetero mediante el desdoblamiento de la política oficial en diálogo y represión; d) el desplazamiento -compensado- de algunas fracciones del BEP respecto del orden neoliberal y e) la aparición de fracciones *desgarradas* del BEP, aquellas que perdieron poder político, pero ganaron económicamente (los capitales agropecuarios y agroindustriales concentrados).

4. La ruptura populista: el kirchnerismo

La llegada al gobierno de Kirchner supuso un nuevo momento en el proceso político. Sintéticamente, se completó la ruptura populista, al ganar las elecciones la propuesta que discursivamente se ordenaba en un antagonismo entre el BEP y el pueblo. Proponiéndose el líder como significativo tendencialmente vacío (Laclau 2006), éste funcionaba como superficie de inscripción de las cadenas equivalentes de demandas populares -y de fracciones del BEP- que en momentos previos habían confluído sin darse constitución identitaria. El campo de antagonismo político se modificó, pues el Estado ya no garantizaba la especulación y exclusión del neoliberalismo, sino que se erigía como garante de la inclusión a través del impulso a la producción y el empleo (Vilas 2017). La construcción de una fuerza política con base en este discurso, da lugar a una identificación retroactiva de diversos agentes con Kirchner, dando origen al *kirchnerismo* (Biglieri 2007). El orden político -construcción del mito trascendente y distribución de roles- de estos años logró no sólo cierta estabilidad, sino que convocó el apoyo explícito de parte de las clases populares, por lo que devino en hegemónico. Los estudios post-fundacionales remarcan el aspecto de ruptura, soslayando continuidades respecto del momento político previo. El populismo siempre se juega entre la continuidad y la ruptura, la discrepancia se basa sobre la falta de definiciones precisas acerca de qué fue exactamente lo novedoso que aportó la llegada de Kirchner y qué fue lo que se sostuvo. Nuestra propuesta busca compensar estos déficits.

En este sentido, no fue Kirchner quien estructuró el discurso populista en el que el Estado se desplazaba del campo enemigo, al oponerse al neoliberalismo (la especulación financiera, la exclusión, las corporaciones) como origen de los males

del pueblo argentino. La estructuración de estos significantes *desde* el gobierno había sido ya realizada por Rodríguez Saá y Duhalde, y antes que ellos había sido anticipada por el GP y diferentes organizaciones de las clases populares. Fue por eso que, en ambos casos y por diferentes vías, se iniciaron diálogos con esas organizaciones para validar el discurso, y se dio forma a las políticas macroeconómicas que modificaban el perfil de la acumulación. Algunas de las propias organizaciones populares reconocieron este cambio: la CGT, el MTA, incluso Madres de Plaza de Mayo se acercaron al presidente decembrino, mientras que la CGT y el MTA, la Federación Tierra y Vivienda (FTV) y la Corriente Clasista y Combativa participaron del Diálogo Social de Duhalde.

¿Qué agregó entonces Kirchner? Hay al menos dos condiciones de enunciación y recepción del discurso que cambiaron,³ y se incorporó un nuevo significante a la cadena de equivalentes, que permitió una nueva narrativa de la historia, que proponía cierta coherencia al proceso en ciernes. Las condiciones que se modificaron fueron que Kirchner fue electo por el voto y asumió en el momento en que la acumulación mostraba sus características más inclusivas en términos de empleo y salarios. Ambas circunstancias difieren de las de sus antecesores, y favorecen la efectividad de la interpelación discursiva tanto por el lugar de enunciación (de mayor legitimidad) como por las condiciones de recepción (la promesa de inclusión se hacía palpable). La masificación de los planes sociales dispuesta por los gobiernos anteriores se había consolidado para entonces, aportando a la receptividad del discurso.

El elemento discursivo incorporado al discurso (y a las políticas) por Kirchner fue la cuestión de los DDHH, ausente en sus antecesores. Los múltiples gestos en relación con este tema le valieron un rápido y fuerte apoyo por parte de la mayoría de los organismos de DDHH, lo que le confirió un prestigio que sin lugar a dudas fue clave en la constitución del kirchnerismo en fuerza política. Al tomar el discurso ya puesto en la escena pública por la CTA y agrupaciones de DDHH, el Presidente realizó una operación de doble lectura de la historia: el neoliberalismo se expresó en la exclusión social de los noventa, como continuidad de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. El flamante gobierno venía a romper esta continuidad,

³ De Ípola (1979) señaló la importancia de considerar estas condiciones para analizar el discurso político.

para formar una democracia real, de pleno respeto de los derechos en su amplio sentido. Si se quiere, se proponía el pasaje de una democracia procedimental a una sustantiva. El efecto de esta nueva discursividad, apoyada en políticas públicas y gestos, se hizo sentir en el orden político. El campo de antagonismos se trastornó, al poner al Estado como garante de derechos en lugar de corresponsable de la exclusión. Al mismo tiempo, la promesa de renovación y normalización (*democratización dentro de la democracia*) interpelaba no sólo a organizaciones sociales sino también a los sectores medios movilizados.

La *transversalidad*, anunciada en el discurso de asunción, expresó en toda su magnitud esta novedad. Las organizaciones identificadas con las tradiciones políticas nacional-populares se integraron en el Estado, manifestándose a favor del Gobierno (Schuttenberg 2011).⁴ La CGT se unificó y también selló una fuerte alianza con el Gobierno (Casas 2011). Suponer que todas estas organizaciones fueron “compradas” con planes sociales o cargos políticos resulta inverosímil. Cada organización interpretó el proceso y actuó en consecuencia (Retamozo 2009). Este consenso movilizado, explícito y organizado, de una parte significativa de las clases populares resultó una completa novedad. Entre los partidos, el Frente para la Victoria (coalición creada por Kirchner) actuó como un imán que incorporó referentes de los partidos políticos mayoritarios, logrando gran productividad electoral: el kirchnerismo se consolidó como fuerza mayoritaria en los poderes del Estado. A partir del PJ, se estructuró una nueva coalición que capitalizaba referentes de centroizquierda de otros partidos.

La transversalidad modificó también el campo de relaciones con las fuerzas políticas que no se incorporaron al kirchnerismo. Entre la oposición partidaria, se produjo una serie de realineamientos que favoreció definiciones hacia la derecha: en algunos partidos esto operó relegando sus propios elementos progresistas (UCR, Partido Socialista, PJ, ARI), en otros casos supuso la creación misma de opciones de derecha liberal (PRO). Los partidos de izquierda reforzaron sus identidades, afianzándose como opciones polares que incidían en la disputa discursiva pero no lograban productividad electoral. La única variante partidaria de centroizquierda no kirchnerista que logró cierta repercusión electoral en este período fue Proyecto Sur.

⁴ Nos referimos al Movimiento Evita, Barrios de Pie, la FTV y al Movimiento de Unidad Popular.

Entre las organizaciones de desocupados no oficialistas, se desestructuró la unidad ya no sólo programática sino incluso en la acción. Aquellas de orientación marxista profundizaron su afinco en las identidades “duras” de origen, mientras que las de orientación de nueva izquierda comenzaron un proceso de revisión ideológico-política, separándose de la disputa por el Estado. La CTA fue su principal aliada en la crítica al Gobierno, ya desvinculada de la CGT oficialista. La recuperación de demandas de la CTA también la ponía en crisis interna, con múltiples organizaciones y dirigentes que buscaban acercarse al Gobierno. Pero al mismo tiempo la insuficiencia de las políticas oficiales (planes sociales y subas salariales contenidas), la ausencia de otras (universalización, ingreso ciudadano) y el rumbo directamente opuesto en otras (tratamiento de la deuda), la mantuvieron en oposición. La CTA continuó mostrando una gran capacidad organizativa, con la realización de la consulta popular en 2003 y la Cumbre de los Pueblos en 2005, ambas en oposición a las políticas oficiales.

¿Qué pasaba mientras tanto con la clase dominante? Aplicados los lineamientos centrales del programa del GP, el conjunto de la gran burguesía se alineó en demandas de estabilidad y previsibilidad del clima de negocios, que se expresaban con rotunda claridad en el manejo de la deuda. Esta política sólo tuvo rechazo de muy pocas organizaciones de acreedores creadas *ad hoc*. El conjunto del BEP fue muy enfático en avalar al Gobierno y apoyarlo de diversas formas. Se trataba de la cuenta pendiente más relevante para continuar la valorización del capital en la nueva fase (Cantamutto y Costantino, 2016). Al garantizar continuidad a las políticas de regulación de la acumulación y avanzar sobre los puntos pendientes comunes, el Gobierno le permitía al capital evitar recurrir a la presión explícita.

El otro punto de acuerdo era morigerar la recuperación de los ingresos de la fuerza de trabajo. El Gobierno creó diversos espacios para que el capital pudiera resolver estas necesidades (Consejo del Salario Mínimo y negociaciones colectivas de trabajo). Si bien se reconocía la primacía de la fracción industrial concentrada, no dejaba de incluirse a todas sus fracciones. La acumulación se estructuró requiriendo la intervención explícita y permanente del Estado: centralmente, conteniendo aumentos de salarios y compensando a las fracciones desplazadas a través de subsidios. Ambos elementos apuntaban a sostener la reducción del costo de producción en la fracción industrial, gran ganadora de la etapa. La expansión de esta

fracción requería además -tanto por las divisas como por los recursos fiscales que aportaba- de la profundización primaria-exportadora, reforzando el poder estructural de las fracciones del capital ubicadas en esas actividades, a las que denominamos desgarradas, por su particular situación en el orden político y el patrón de reproducción económica.

El BEP alteró así su situación previa. No hubo ningún cambio de sus integrantes (no salió ni entró ninguna clase o fracción), pero sí un desplazamiento en su interior: se consolidó la dirección política de los capitales industriales exportadores, que relegó así a las finanzas extranjeras y los operadores de los servicios públicos, privilegiados en el orden neoliberal. Los capitales financiero local y de la construcción se mantuvieron asociados con la fracción dominante, y de este modo se expandieron fuertemente en el período, volviéndose uno de los principales apoyos del Gobierno. La pequeña burguesía industrial y comercial completa el arco de alianzas del Gobierno con el empresariado local. En cambio, la burguesía agropecuaria al tiempo que consolidó su poder estructural, volviéndose clave para garantizar la expansión del conjunto del capital, se vio desplazado relativamente en su capacidad de influir en las políticas públicas y el discurso. Así, aunque fue sin dudas una de las fracciones ganadoras en lo económico, claramente perdió relevancia en la dirección política. Esta tensión, el desgarramiento, fue la que impulsó el conflicto de 2008.

Contra una interpretación difundida de que fue Kirchner o su grupo político quienes construyeron hegemonía (cf. Manzanelli & Basualdo 2016; Vilas 2017), se sostiene que fue el empresariado industrial concentrado, una fracción del BEP, la que dirigió el proceso de universalización de sus demandas. En tal sentido, logró incorporar de manera subordinada demandas de otras fracciones del BEP e incluso de las clases populares: esta expansión de su programa se puede ver en el pasaje del pedido de devaluación al discurso de producción nacional e inclusión con empleo e incluso los pedidos por programas sociales. Este proceso de vaciamiento de significantes le permitió incluir demandas en el discurso y en las políticas públicas que definieron el orden político. Es decir, modificó su propio programa (conjunto de demandas), sin ceder por ello en lo que consideraba fundamental. En tal sentido, las demandas de clases populares fueron incluidas, consideradas de modo subalterno, lo cual es una clave para hablar de un orden hegemónico; esto es, que hubo

concesión efectiva -en lo simbólico y lo material. Estas concesiones fueron las que motivaron interpretaciones favorables de las clases populares, que redirigieron la capacidad organizativa y disruptiva que lograron en la resistencia al neoliberalismo al apoyo explícito del gobierno. Una parte de las clases populares se organizó para mostrar su anuencia, marcando el consenso activo, el carácter hegemónico del orden político.

El rol de Kirchner y su fuerza política no fue trivial, pues aportó particularidades específicas a la construcción, sin las cuales no resultaba posible completar la ruptura populista, que dio la forma concreta de esta construcción hegemónica. Kirchner -con sus ambiciones personales, sin duda- completó la ruptura política iniciada por la burguesía industrial. Tan así es que éste pudo retraerse de la dirección del aparato estatal, legando esta tarea al personal político kirchnerista, difuminando así su rol hegemónico. Lo que aparece como autonomía del Estado (la intervención política) en el discurso kirchnerista no es sino el mayor éxito de la hegemonía de la fracción industrial: ¿qué más consensuado que aquello de lo que parece no ser necesario hablar?

El Gobierno actuó en este momento como pivote de diálogo entre un amplio conjunto de fracciones del capital con las clases populares, excediendo al sindicalismo para incorporar a parte del movimiento piquetero y las organizaciones de DDHH. Que el kirchnerismo haya logrado incorporar las demandas de estos dos últimos sectores al programa de demandas articuladas de la industria -que permaneció inalterado en sus fundamentos-, desplazando a la fracción hegemónica del centro de escena, ilustra el logro de un orden político de tipo hegemónico.

5. Radicalización particularista: la identidad kirchnerista

El último momento del proceso político se abre a mediados de 2008 y se caracterizó por la afirmación particularista de la fuerza en el Gobierno, que implicó la consolidación de una identidad propiamente kirchnerista. Esta afirmación de la particularidad supuso un desmedro por la intención hegemónica del Gobierno, al presentar fronteras menos lábiles dentro de la comunidad política (Aboy Carlés 2010). Sin embargo, justamente, es aquí donde debe enfatizarse el peligro de pensar la construcción política desde la fuerza en el Gobierno y no a través de ella. Fue

en este mismo período que se consolidó la hegemonía del empresariado industrial y sus socios, al tener en el Gobierno un representante que garantizó el cumplimiento de sus demandas, agregándole elementos que el BEP nunca hubiera considerado, en una narración que fomentó la idea de separación entre poder económico y político, facilitando el proceso de identificación popular con el kirchnerismo. Aparecieron así ya no sólo las alianzas y manifestaciones de apoyo al Gobierno, sino organizaciones identificadas con el orden político kirchnerista. La sistemática defensa del “crecimiento con inclusión” y la “industrialización” como ejes del discurso kirchnerista deben dar una pista del agente de clase que los sustenta.

Este cambio de énfasis en el proceso político *se inició por la impugnación de las fracciones desgarradas del BEP al orden estructurado*: los capitales agropecuarios y agroindustriales, desplazados de la hegemonía política pero reafirmado en su poder económico, cuestionó las políticas públicas y el discurso que le daba coherencia. El orden político fue enfrentado por una fracción de las clases dominantes. La estrategia política del Gobierno, al afirmarse como representante del pueblo relegado frente a las corporaciones, permitió la reafirmación del carácter populista del proceso político.

Como señalamos, la acumulación requería de la intermediación permanente del Estado, para arbitrar entre las necesidades de las fracciones del BEP y de éste con las clases populares. Respecto de las primeras, las tareas centrales eran compensar a las fracciones cuyos precios se encontraban congelados para subsidiar la tasa de ganancia industrial y garantizar las condiciones que favorecían el superávit comercial primario. Respecto de las segundas, la clave era contener las demandas por mejores condiciones de vida. A esto se sumaban otras demandas comunes del BEP, que seguirían como eje en este período: garantizar previsibilidad y resolver el problema de la deuda. Sobre estos ejes buscó avanzar el Gobierno desde el período anterior, y enfrentó las contradicciones que implicaban justo cuando estalla la crisis en el nivel mundial. Esto permitió que las fracciones industriales, aun frente a un escenario de evidente crisis, pudieran valorizarse como capitales, reproduciendo en el ciclo el conjunto de sus características dependientes (López 2015).

Durante 2008, la impugnación de los capitalistas agrarios fue incapaz de transgredir sus propias fronteras corporativas, a pesar de postular un discurso con pre-

tensiones universales. La tarea de expandir sus horizontes de interpelación fue retomada por partidos de oposición (especialmente, PRO, ARI-CC y UCR), que incorporaron un registro liberal-republicano como superficie de inscripción para ordenar ese discurso. Los límites de esta interpelación al interior del propio BEP obligaron a buscar acuerdos mínimos sobre los que avanzar, entre los que la contención de las demandas populares y la resolución del frente exterior estaban en primer orden. El pedido de previsibilidad se enfrentó con el propio desacuerdo sobre las reglas a establecer: la fracción industrial necesitaba de intervenciones que los capitales agrarios se negaban a aceptar.

Por su parte, el antagonismo entre este discurso y el del Gobierno produjo la reafirmación del segundo como popular, lo cual inició un proceso de identificación de fuerzas sociales como propiamente kirchneristas. Esto fue incluso tematizado como una disputa cultural a través de una amplia política mediática del Estado, la ampliación de derechos ciudadanos de diverso tipo (ley de matrimonio igualitario, de género, de medios, entre otras) y la intervención sostenida de intelectuales - agrupados en Carta Abierta- (Waiman 2012). Las clases populares vivieron esta reafirmación antagonica del kirchnerismo en el mismo momento en que se expresaban los límites en la recuperación de sus condiciones de vida. La presión en los niveles de base por el agotamiento material de la recuperación y el carácter instrumental de los acuerdos previos llevó a la ruptura de las alianzas con la CGT. No pretendemos aducir un engaño, sino enfatizar que el orden político hegemónico del empresariado industrial no entraba en necesaria contradicción con la ampliación de algunos derechos sociales o de cierta forma de disputa cultural.

El Gobierno enfatizó su carácter de representante de la totalidad, frente a reclamos particulares, corporativos, entre los que igualmente se encontraban las entidades de los capitales agrarios y agroindustriales, Clarín... o la propia CGT (Inda 2012). El lábil giro a la supuesta defensa de los intereses de la totalidad de la nación amenazada por los excesos particulares. Los sectores vulnerables se volvieron así la auténtica *plebs* que el gobierno transfigura en *populus*. Esta plebe no podía estar organizada, que significaría una particularización, sino que era representada por el propio Gobierno, que sería así nacional y *popular*.

Se reestructuró así el campo político. Se produjo un desplazamiento general a *derecha* de los partidos mayoritarios, lo que tensionó al propio Gobierno, que no era inmune a su contexto: al igual que el Frente Renovador, el propio Frente para la Victoria buscó representar un espacio intermedio del orden político actual y elementos más liberales. Éste era el programa mínimo común del BEP, siendo la alternativa del PRO la propuesta de las fracciones desgarradas y las desplazadas. Como contrapartida, aparecieron opciones electorales del trotskismo y la izquierda independiente.

El Gobierno logró fungir como representante de las demandas *comunes* del BEP, y en particular de la fracción hegemónica y sus aliados; todo lo cual implicaba sostener el lugar desgarrado de las fracciones agropecuarias. Justamente por eso, el Gobierno logró modificar el campo político al recurrir a la tradición nacional-popular como fuente de oposición a lo más conservador del BEP. Por el propio proceso de disputa al interior del BEP y de éste con el Gobierno, la fracción industrial abandonó relativamente las posiciones visibles del gabinete, lo que permitió la llegada de funcionarios no ligados de manera directa a esta fracción (el ministro de economía Axel Kicillof sería un buen ejemplo de lo que referimos). Esta situación permitió al mismo tiempo la aplicación de políticas que comenzaron a generar fricciones con los rasgos centrales del modo de desarrollo predominante, y que esto alimentara la lectura del Gobierno como *popular* y anti-neoliberal.⁵

Las clases populares se vieron de hecho compelidas y adoptaron por principal distinción su identidad kirchnerista o no –distinción que atravesó al conjunto de las clases. El campo político de conjunto pasó a dividirse por la identificación (o no) con el orden político kirchnerista, lo que no había ocurrido sino hasta que las fracciones desgarradas lo intentaron impugnar. Esta fuerte tensión permitió la aparición en el campo popular de una auténtica identidad kirchnerista, más allá de alianzas o acuerdos de organizaciones. La conjunción de una narración propia, un conjunto de políticas valoradas como positivas, una serie de enemigos internos a la comunidad política (“la *corpo*” siempre cambiante) dieron impulso a esta identidad. Su expresión organizada admitió grados de identificación respecto de trayectorias previas y programas a futuro (La Cámpora por un lado, Unidos y

Organizados por el otro). La fortaleza de este proceso de afirmación en la particularidad tenía por contraparte el final de la intención hegemónica, lo que redundó en la dispersión de aliados y simpatizantes, incluso al interior de las clases populares: ya sólo quedaba espacio para los convencidos. Esto probaría ser un problema en las elecciones de 2015.

Reflexiones finales

El estudio de los procesos políticos no puede prescindir de herramientas conceptuales disponibles. En este sentido, se trabajó aquí asumiendo que estos no ocurren en el vacío, sino que modifican relaciones sociales existentes, algunas de ellas persistentes, otras cambiantes. La apuesta es esclarecer esas mutaciones de las relaciones sociales. Los agentes sociales actúan dentro de un espacio, preservándolo y cambiándolo en el marco de una disputa de poder. La pugna por estructurar el espacio de lo social tiene por principal orientación definir un orden político, como mito trascendente que ofrece lugares y tareas a los actores para conciliar la promesa de comunidad unificada. Se analizó este proceso a través de sus principales fases.

Tres son los hallazgos relevantes aquí propuestos. El primero es que el orden político kirchnerista fue de tipo hegemónico, lo cual significa que organizó de una manera particular la dominación, logrando convocar consenso activo, deliberado, de parte de las clases populares. Esto es una novedad remarcable y distinguible de órdenes previos como el neoliberal, que se constituyó sobre la base de desarticular, desorganizar las clases populares, siendo un orden estable basado sobre mecanismos de consenso negativo. Es una novedad que organizaciones de las clases populares hagan interpretaciones del orden político imperante que las movilice en explícito apoyo. Se distingue también con claridad del actual proceso político bajo el gobierno de Cambiemos, por motivos similares.

⁵ A partir de 2011 comienzan a aparecer algunas políticas (los controles de capitales y de compras al exterior, centralmente) que entran en conflicto con el modo de desarrollo predominante hasta entonces. Esto no impidió a un mismo tiempo la recuperación de una agenda de mayor subordinación externa, expresada en la validación de los fallos del CIADI, el pago a REPSOL, el arreglo con el Club de París y reapertura del canje de 2005, entre otras (ver Cantamutto y Costantino 2016). Esta fase del modo de desarrollo acumuló tensiones que el gobierno de Cambiemos resolvió inclinándose en favor de este segundo conjunto de políticas.

El segundo hallazgo deriva de éste, y es que la constitución de nuevas identidades políticas (la existencia de ‘kirchneristas’) es el resultado de este orden político específico. No todo orden político estable define una renovación de identidades políticas: el kirchnerismo lo hizo, y es un desafío explicar cómo ocurrió. La disputa de agentes sociales de clase y las mediaciones de los partidos políticos debe ser explicada y esta investigación buscó aportar a ese objetivo. En este sentido, la mediación significativa del discurso es considerada central para entender la disputa polémica por el orden político, pero no aceptamos la reducción metodológica de toda la realidad a actos discursivos.

El tercer resultado es que “el agente” de la construcción hegemónica fue una fracción del BEP. Es llamativa tanto la indeterminación de quiénes dirigen el proceso en la matriz postfundacional, como la tendencia de la matriz marxista a reducir el proceso político a la economía política: las fracciones que ganan, serían las que dirigen. La presente investigación desafía esas comprensiones. En particular, se encontró un desplazamiento significativo para explicar el proceso, que es la existencia de fracciones *desgarradas* entre la clase dominante: ganadoras en lo económico, desplazadas en lo político. Seguir el derrotero de las fracciones agropecuarias resulta un claro énfasis en esta relación entre economía y política: sólo así es posible explicar la radicalización particularista acontecida desde 2008, que derivó en la identidad política kirchnerista.

Si bien este trabajo no ahondó en la conceptualización teórica, ofrece pistas de la trayectoria a atravesar. Recuperar los efectos combinados de las relaciones estructurales (que no son sólo económicas) y la contingencia de la disputa social (que no es sólo política) puede permitirnos una comprensión más cabal de los procesos políticos contemporáneos. Una economía sin economicismos y una política sin politicismos.

Bibliografía

- Aboy Carlés, G., 2010. Populismo, regeneracionismo y democracia. *POSTData*, 15(1), pp. 11-30.
- Adamovsky, E., 2007. Historia y lucha de clase: repensando el antagonismo social en la interpretación del pasado. *Nuevo Topo*, (4), pp. 7-33.
- Barbosa, S., 2010. Menemismo y kirchnerismo en Argentina: un análisis político discursivo de su construcción hegemónica. *Pensamiento Plural*, (6), pp. 11-34.
- Basualdo, E., 2006. *Estudios de Historia Económica Argentina. Desde Medios del Siglo XX a la Actualidad*. Buenos Aires: FLACSO/Siglo XXI.
- Biglieri, P., 2007. El retorno del pueblo argentino: entre la autorización y la asamblea. Argentina en la era K. En P. Biglieri & Perelló, G. (Eds.), *En nombre del pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista*. Buenos Aires: UNSAMedita, pp. 61-84.
- Bonnet, A., 2012. La crisis del Estado neoliberal en la Argentina. En M. Thwaites Rey (Ed.), *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas*. Santiago de Chile: CLACSO/ARCIS, pp. 279-302.
- Campione, D. & Rajland, B., 2006. Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de 2001 en adelante. Novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos. En G. Caetano (Ed.), *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. Buenos Aires: CLACSO, pp. 297-330.
- 36 Cantamutto, Francisco J. (2013) "El kirchnerismo como construcción hegemónica populista", en *Debates Urgentes*, vol. 2, N° 3, pp. 29-56.
- Cantamutto, Francisco J., (2015), "El populismo que no fue: los gobiernos de Rodríguez Saá y Duhalde", en *Cuestiones de sociología. Revista de Estudios Sociales*, N° 13. Disponible en:
<http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn13a05>

Cantamutto, Francisco y Agostina Costantino (2016), "El modo de desarrollo en la Argentina reciente", en *Mundo Siglo XXI, revista del CIECAS-IPN*, Vol. XI, n° 39, pp. 15-34. Disponible en:

<http://www.mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v11/39/02.pdf>

Casas, A., 2011. La clase trabajadora a diez años de la rebelión popular. *Revista Herramienta*, XV(46).

Cheresky, I., 2002. *Las elecciones nacionales de 1999 y 2001. Fluctuación del voto, debilitamiento de la cohesión partidaria y crisis de representación*. Document de travail de la Chaire MCD n. 10. Montreal: Chaire de Recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie.

Cortés, M., 2008. *Movimientos sociales y Estado en Argentina: entre la autonomía y la institucionalidad*. Buenos Aires: CLACSO.

De Ípola, E., 1979. Populismo e ideología (A propósito de Ernesto Laclau: Política e ideología en la teoría marxista). *Revista Mexicana de Sociología*, 41(3), pp. 925-960.

Fair, H., 2016. Las principales fuerzas políticas durante la crisis del modelo de Convertibilidad de diciembre de 2001. Posicionamientos políticos, disputas públicas e impacto hegemónico. *Revista Perspectivas de Políticas Públicas*, 6(11), pp. 147-178.

Féliz, M. y López, E., 2012. *Proyecto neodesarrollista en la Argentina. ¿Modelo nacional-popular o nueva etapa en el desarrollo capitalista?* Buenos Aires: Herramienta - El Colectivo.

Féliz, M., López, E., Pérez, P., Barrera, F., Chena, P., Bona, L., Fernández, L. & Cantamutto, F. J. (Eds.), 2012. *Más allá del individuo. Clases sociales, transformaciones económicas y políticas estatales en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: El Colectivo.

Freyre, M. L., 2014. El problema del desempleo en Argentina y el surgimiento de los Planes de Empleo y sostenimiento de ingresos en la agenda pública. *Revista Sociología e Política*, 22(51), pp. 35-54.

- Gamallo, L., 2014. Usando a Gramsci: El debate acerca de la hegemonía kirchnerista. *Sudamérica: Revista de Ciencias Sociales*, (3), pp. 173-195.
- Inda, G., 2012. La disputa por la hegemonía político-ideológica: trabajadores y sindicatos en el discurso presidencial kirchnerista (Argentina, 2007-2012). *Estudios Sociales Contemporáneos*, (7/8), pp. 183-214.
- Iñigo Carrera, N. & Cotarelo, M. C., 2006. Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina. En G. Caetano (Ed.), *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. Buenos Aires: CLACSO, pp. 49-92.
- Isaac, J., 1987. *Power and Marxist Theory*. London: Cornell University Press.
- Laclau, E., 2006. *La razón populista*. México: FCE.
- López, E., 2015. *Los años post-neoliberales. De la crisis a la consolidación de un nuevo modo de desarrollo*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Manzanelli, P. & Basualdo, E., 2016. Régimen de acumulación durante el ciclo de gobiernos kirchneristas. Un balance preliminar a través de las nuevas evidencias empíricas de las cuentas nacionales. *Realidad Económica*, (304), pp. 6-40.
- Mazzeo, M., 2011. *Poder popular y nación. Notas sobre el Bicentenario de la Revolución de Mayo*. Buenos Aires: El Colectivo y Herramienta.
- Merino, G., 2014. *El surgimiento del grupo productivo y el retorno de los «Capitanes de la industria» al centro de la lucha política, 1999-2003*. Tesis de Doctorado. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
- Muñoz, A., 2010. *Sísifo en Argentina. Orden Conflicto y sujetos políticos*. México: Editorial Universitaria Villa María, Plaza y Valdés.
- Natalucci, A. & Schuttenberg, M., 2013. Pensar el kirchnerismo: estado actual de los estudios sobre movimentismo e identidades nacional-populares. En M. Retamozo, M. Schuttenberg & Viguera, A. (Eds.), *Peronismos, izquierdas y organizaciones populares. Movimientos e identidades políticas en la Argentina contemporánea*. La Plata: UNLP, pp. 23-46.

- O'Donnell, G., 1982. *El Estado Burocrático Autoritario*. Buenos Aires: Editorial Belgrano.
- Osorio, J., 2001. *Fundamentos del análisis social. La realidad social y su conocimiento*. México: FCE - UAM Xochimilco.
- Pereyra, C., 1988. *El sujeto de la historia*. México: Alianza Universidad.
- Piva, A., 2007. Acumulación de capital y hegemonía débil en la Argentina (1989-2001). *Realidad Económica*, (225), pp. 72-98.
- Piva, A., 2015. *Economía y política en la Argentina kirchnerista*. Buenos Aires: Batalla de Ideas.
- Retamozo, M., 2009. *Movimientos sociales. Subjetividad y acción de los trabajadores desocupados en Argentina*. México: FLACSO México.
- Rieznik, P., 2003. 1982-2002: Dos décadas de democracia y el Argentinazo. *Razón y Revolución*, (11), pp. 19-23.
- Rodríguez Diez, A., 2003. *Historia secreta. Devaluación y pesificación*. Buenos Aires: Bifronte.
- Schuttenberg, M., 2011. La reconfiguración de las identidades «nacional populares». Los puentes discursivos para la inserción de tres tradiciones políticas en el espacio «transversal kirchnerista». *Sociohistórica*, (28), pp. 41-73.
- Svampa, M. & Pereyra, S., 2004. *Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Vilas, C., 2017. Política, Estado y clases en el kirchnerismo: una interpretación. *Realidad Económica*, (305), pp. 3-63.
- Waiman, J., 2012. El debate sobre la hegemonía cultural kirchnerista. En *VII Jornadas de Sociología de la UNLP*. La Plata.
- Wainer, A., 2013. Cambios en el bloque en el poder a partir del abandono de la Convertibilidad. ¿Una nueva hegemonía? En Grigera, J. (Ed.), *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*. Buenos Aires: Imago Mundi, pp. 63-96.